

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA
DEMANDADO	ITAÚ BANCO CORPBANCA S.A
RADICADO	05001-31-05-017-2022-00048-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de jubilación convencional
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **CARLOS ARTURO GUTIÉRREZ ZAPATA** contra **ITAÚ BANCO CORPBANCA S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 013**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial del demandante, contra la

sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, el día 17 de mayo de 2022.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el demandante CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, nació el día 17 de octubre de 1948, por lo que cumplió 55 años de edad el 17 de octubre de 2003.

Se expresó que el demandante prestó sus servicios mediante contrato de trabajo escrito, en forma personal y continua al BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO S.A. hoy ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., desempeñando el cargo de Auxiliar de Operaciones, desde el 12 de abril de 1971 hasta el 31 de agosto de 1997, fecha última en que se terminó el vínculo laboral producto de una conciliación, acumulando un tiempo de servicio de más de 20 años.

Se dijo que el actor es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo (en adelante CCT) suscrita el 23 de agosto de 1985, vigente 1985-1987, (parágrafo art. 1º de la CCT), la cual aún continua vigente al momento de acreditar el actor los 20 años de servicio y de cumplir los 55 años de edad, por cuanto no ha sido modificada, derogada o denunciada.

Que el señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, se desvinculó del banco producto de una conciliación celebrada el 29 de agosto de 1997 cuando tenía 48 años cumplidos, pero ya tenía acreditados los 20 años de servicio.

Se manifestó que el demandante tuvo como sueldo promedio devengado en el último año de servicio, la suma de \$950.362, el cual indexado desde el mes de agosto de 1997 y hasta el 17 de octubre de 2003 fecha en que cumplió los 55 años, arroja un valor promedio de \$1.785.628.

Se señaló también que el demandante acreditó 20 años al servicio del banco el 12 de abril de 1991 causando en dicho momento la pensión convencional y 55 años de edad el 17 de octubre de 2003, es decir, cumplió con

los requisitos del artículo 54 de la CCT vigente 1985-1987, que estableció una pensión mensual vitalicia de jubilación, sin límite en el tiempo, la cual se causa y paga, cuando, para el caso, éste llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad y después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos.

Se expuso que el banco demandado ha reconocido que, en materia de pensión convencional, el tiempo de servicio es el requisito que causa la pensión y la edad, es solo una condición para su exigibilidad, teniendo en cuenta que ha reconocido la misma a empleados que completaron el tiempo de servicio y que cumplieron la edad establecida en la CCT después de finalizada la relación laboral.

Finalmente se sostuvo que el demandante con el fin de interrumpir la prescripción, presentó reclamación a la entidad demandada, el 25 de mayo de 2021, pidiendo el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación consagrada en la convención colectiva de trabajo vigente 1985-1987, firmada el 23 de agosto de 1985, mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que se DECLARE que el señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 71 de la Convención Colectiva de trabajo, compilación 1985-1987, y por lo tanto, tiene derecho a que ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. le reconozca y pague la pensión mensual vitalicia de jubilación prevista en el Capítulo décimo de la CCT; a partir del 17 de octubre de 2003, fecha en la que cumplió 55 años de edad y tenía acreditado más de 20 años al servicio del Banco; prestación económica que ha de ser liquidada en la forma prevista en la misma convención colectiva de trabajo artículos 54, 55 y 58.

Asimismo, que se DECLARE que la pensión de jubilación consagrada en los anteriores artículos de la CCT firmada el 23 de agosto de 1.985, vigente 1985-1987 entre el Banco y el Sindicato de trabajadores, tiendo en cuenta las

prerrogativas de ser vitalicia, compatible y excluyente con la pensión voluntaria y/o legal que percibe actualmente el actor, por cuanto fue firmada antes de la expedición del decreto 2879 de 1985, que se refiere a la compatibilidad de las pensiones extralegales, además las partes establecieron de manera expresa las normas exclusivas que gobernarían la pensión mensual vitalicia de jubilación convencional, art. 70° (en armonía con el decreto 3041 de 1966) y artículo 71° (régimen de transición artículos del capítulo 10 de pensiones para los trabajadores con contrato al 31 de agosto de 1985); los artículos 54° (vitalicia), 58° (excluyente y a elección del actor), 62° y finalmente se tiene que si la partes querían que la pensión mensual vitalicia de jubilación convencional fuera compartida, así lo debieron haber consagrado expresamente en el estatuto convencional, lo cual no se estableció.

Se CONDENE a la demandada a indexar la base salarial con la que se debe determinar el valor de la primera mesada pensional del actor, por el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 1997, fecha de terminación del contrato y 17 de octubre de 2003, fecha de cumplimiento de la edad o en que se hizo exigible el derecho.

Y se CONDENE a la demandada, a pagar la pensión mensual vitalicia de jubilación al señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA en forma retroactiva, esto es, desde el 17 de octubre de 2003, fecha a partir de la cual acreditó 55 años de edad y tenía más de 20 años de servicios, teniendo como mesada inicial de \$1.785.628, para el año 2003, y hacia el futuro, incluidas las mesadas adicionales, y los reajustes establecidos por Ley, y se reconozca el interés moratorio sobre el pago de las mesadas adeudadas o en subsidio la indexación.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS

Se DECLARE que el documento, acta de conciliación y/o transacción o acuerdo celebrado entre el demandante y el banco, es ineficaz o inválido en el clausulado que modificó o desmejoró las prerrogativas de vitalicia, compatible, excluyente y en el monto que tiene de la pensión consagrada en la convención colectiva de trabajo suscrita el 23 de agosto de 1985, vigente 1985-1987 capítulo

décimo; y como consecuencia, se restablezca para esta prestación, las características que fueron afectadas, modificadas o desmejoradas por el acuerdo extra convencional.

Se CONDENE a la demandada a reconocer sobre el importe de los reajustes o mesadas plenas adeudadas, el interés moratorio y la concurrente o subsidiaria indexación y se condene a la demandada al pago de las costas del proceso, debidamente indexadas.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, el Banco Comercial Antioqueño S.A. (hoy Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A.) señaló que, efectivamente existió un vínculo laboral con el demandante que inició el 12 de abril de 1971 y culminó el 31 de agosto de 1997, por mutuo acuerdo entre las partes, tal como quedó acordado en la conciliación firmada entre las partes el 23 de julio de 1997.

Puntualizó a su vez que la Convención Colectiva de Trabajo, que aplicaría al caso bajo estudio, es la que tuvo vigencia desde 1991 hasta 1993, por haber cumplido el demandante los 20 años de servicio en vigencia de la misma, y concretamente porque en su artículo 54 señala que, para ser beneficiario de la pensión convencional, se requiere cumplir 2 requisitos, cuales son: Cumplir 50 años en caso de Mujer; y 55 años en caso de ser hombre. - Tener 20 años de servicios en la compañía. Y en el caso concreto, los 20 años de servicio del demandante se causaron, en vigencia de la CCT de 1991 y el requisito de la edad para el año 2003.

Quiso significar la entidad demandada que, en el caso que hoy nos ocupa, al momento de finalizar el vínculo laboral suscrito entre el demandante y la entidad por mutuo acuerdo, esto es, el 23 de julio de 1997, la CCT de 1985-1987, no se encontraba vigente, por lo que no le era aplicable, incluso, el demandante tampoco cumplió los requisitos de pensión de jubilación en vigencia de la CCT 1991 – 1993, última Convención que predicó una pensión Convencional, bajo los mismos requisitos de las convenciones antecesoras pues, el demandante, solo

hasta el año 2005 es que pudo reunir los requisitos, cuando tenía vida jurídica una convención distinta a las antes mencionadas.

No obstante acotó que, el banco por mera liberalidad, extendió el beneficio convencional al demandante y, en virtud de la mencionada acta de conciliación, le reconoció la pensión transitoria de jubilación convencional a partir del 1 de agosto de 1997, cuyo carácter vitalicio, dependería de que al momento de que se cumpliesen los requisitos de ley para gozar de pensión de vejez, por parte del ISS, se subrogara dicha obligación en aquella entidad, quedando a cargo de la entidad crediticia solo el mayor valor o diferencia si lo hubiere.

La demandada planteó a título de excepciones de mérito las siguientes:

“EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, EXCEPCIÓN GENERICA O INOMINADA”

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, la juez de instancia, en audiencia pública celebrada el día 17 de mayo de 2022, absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, e impuso costas al actor como parte vencida.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que, en materia de pensión de jubilación es el tiempo de servicio el elemento habilitante para la causación, y el cumplimiento de la edad, es un requisito del disfrute. Que, en el caso en concreto, se acreditó que el demandante cumplió 20 años de servicio, en el año 1991, época en la que el actor, causó su derecho a la pensión, data para la cual, no estaba vigente la convención 1985-1987, cuya aplicación se reclama, sino CCT 1991-1993.

Expuso la juez de instancia, que lo que determina que la pensión se cause con la convención colectiva después de 1985, es como éste regulado en la cláusula convencional, por lo cual, asintió que en las cláusulas de la CCT allegadas al proceso, no se indica expresamente la posibilidad de la compatibilidad de la pensión.

Que en el acta de conciliación suscrita entre las partes, lo que se hizo fue anticipar el disfrute de la pensión del demandante, prestación económica que

tiene la naturaleza de ser convencional, pues en ella se aplicaron los artículos 54, 59 y 60 de la CCT.

En cuanto a la ineficacia del acta de conciliación, consideró la A quo que la misma no vulneró derechos ciertos e indiscutibles, y fue suscrita además por funcionaria judicial competente y en ella se refiere claramente a una pensión de jubilación convencional que da aplicación a la CCT, especificando que para el año 1997, época en la que las partes suscribieron el acta de conciliación, el demandante no cumplía la edad que exigía el CCT 1991-1993, pero que al respecto es pacífica la jurisprudencia de la CSJ, al señalar que la edad es un requisito para el disfrute de la prestación, mas no de la causación.

Finalmente expresó que, aunque el demandante pretende la aplicación de la CCA 1985-1987, sin embargo, en sentencia del Tribunal Superior de Medellín, la cual acogió el despacho, se analizó la posibilidad de dar aplicación al artículo 58 que remite al capítulo 10, concluyéndose que no era posible su remisión.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Inconforme con la decisión de primer grado, el apoderado judicial de la demandante, presentó recurso de apelación, a través del cual solicitó que se revoque de manera total la sentencia, y en su lugar se profiera sentencia en la que se condene al reconocimiento de las pretensiones de la demanda.

Expresó el recurrente que la juez de instancia desconoció el acuerdo de voluntad previsto en el artículo 71 de la convención colectiva del año 1991-1993, que señala sobre las pensiones de jubilación, comprendido en el capítulo de la actual compilación convencional (83-85), pues el demandante tenía contrato de trabajo escrito y vigente y lo que hizo el artículo fue establecer fue una especie de régimen de transición, en otras palabras, a las personas que ingresaban con contrato laboral a partir del 1 de septiembre de 1985, no se les aplicaría el régimen del banco, sin embargo, los trabajadores que tenía contrato al mes de agosto de 1985, si se les aplicaría la convención, y desconocer esto bajo el argumento que en el caso del demandante tenía plena aplicación el Decreto 2879

del año 1985, está cimentado en un error, y una interpretación que es errónea, por cuanto el párrafo del artículo quinto, dice que lo dispuesto en este artículo, no se aplicara cuando en la respectiva convención colectiva, se haya dispuesto expresamente que las pensiones no serán compartidas con el Instituto de los Seguros Sociales.

Expresó que la A quo, exige que la convención diga textualmente que esa pensión es compatible y decir textualmente, es diferente a decir expresamente, pues a juicio del recurrente no se requiere decir una formula sacramental de tal manera que diciendo equis palabra tiene que ser así la pensión.

Expuso que la juez apoyada en esa interpretación errónea, está desconociendo que en el artículo 54 de la convención, se refiere a pensión vitalicia de jubilación y ese argumento expresado en los alegatos de conclusión no fue incluido en la sentencia de primera instancia, y fue pasado de largo, y ello es determinante, pues al decir vitalicio corresponde con el requisito del párrafo del artículo quinto, y la expresión pensión vitalicia, se refiere que se debe pagar por toda la vida, y la pensión que se está pagando al demandante, se la pagaron hasta llegar al sistema de seguridad social, y por tanto, no es vitalicia, concluyendo el apelante que la cláusula si determina de manera expresa que la pensión es compatible.

Agregó además que la juez cimienta la sentencia, en un fallo emitido por el Tribunal Superior de Medellín, que no está ejecutoriado y que además en la sentencia lo que se indicó es que queda a elección del demandante de elegir o la pensión convencional o la legal, pero no dice que no sean compatibles las pensiones.

Señaló que, en la sentencia de primera instancia, no se analizó los argumentos del demandante, concernientes a las características que tenía la pensión de jubilación consagrada en el artículo 54, es decir compatible, lo cual se denota en el artículo 62 de la convención colectiva.

Aseguró asimismo que, para determinar la compatibilidad, la A quo se apoyó en el artículo 58, en armonía con el artículo 70, y es ahí donde surge otra

interpretación equivocada, pues la disposición dice otra cosa, dado que la normatividad, utiliza la palabra consonancia y no se está diciendo que las pensiones de jubilación de la convención colectiva de trabajo serán compartidas, sino que dice que se aplique en consonancia.

El otro punto de desacuerdo surge en relación a la cuantía de la pensión, pues arguye el apelante que en la misma no se tuvo en cuenta el nivel de ingresos del actor, de manera que el computo de la pensión será igual a la suma de los diferentes porcentajes.

En último lugar señaló que, en la conciliación se desconocen derechos adquiridos por el demandante, y con este proceso no se busca dos pensiones, sino que la pensión convencional que el demandante adquirió tiene unas prerrogativas, esto es, que es compatible, pues al decir que es vitalicio es compatible, concluyendo el apelante, que así se indica en la convención de trabajo, en los artículos 62 y 71.

Alegatos de conclusión

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente los apoderados judiciales de **ambas partes** hicieron uso de los alegatos de instancia.

El apoderado judicial de la **parte demandante** dejó a consideración de esta instancia, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 228 de 2021, en la cual fue parte accionado el mismo banco del presente proceso ordinario, y en la cual se pretendía el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional. A criterio del apoderado judicial, la citada sentencia, constituye un precedente judicial obligatorio, el cual debe ser aplicado al caso en concreto.

Expuso que la citada sentencia refuerza los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en especial el punto concerniente a que la edad en tratándose de la pensión, es un mero requisito de exigibilidad, siendo el tiempo de servicio (20 años), el único requisito que debía acreditar el demandante estando vigente el vínculo laboral para causar la prestación solicitada, y como quiera que éste se había cumplido al momento de celebrarse la conciliación, ello

deriva entonces que tiene causado o ingresado en su patrimonio, un derecho adquirido que en manera alguna puede ser conculcado por el banco demandado.

Otro aspecto que cuestiona, es que en el acta de conciliación se estableciera que la pensión reconocida era la convencional de manera anticipada, toda vez que en ninguno de los apartes de esta se señala esto, y que si bien es sabido que los términos de toda conciliación deben ser expresos detallados y concisos en lo que está disponiendo. Es claro pues que el uso de la palabra “convencional” señalada en el acta, corresponde claramente al acuerdo con convención que fue plasmada en dicho documento o acta.

Replica que en el banco demandado no existe pensión convencional para los trabajadores que ingresaran con contrato de trabajo a partir del 1° de septiembre de 1985. Que el capítulo décimo pensional (todo) solo se aplica a quienes tienen contrato de trabajo vigente hasta el 31 de agosto de 1.985 requisito que cumple el demandante (ver artículo 71° convención 91-93), lo que lo hace acreedor por disposición de las partes a la prestación en la cuantía y prerrogativas señaladas en la demanda.

En último lugar sostuvo que la conciliación, no se puede trasgredir un derecho mínimo del trabajo o derechos adquiridos, y mucho menos modificar a través de un acuerdo extralegal (conciliación) una convención colectiva.

De otro lado, a la doctora JULIANA ROSALES RAMIREZ, portadora de la tarjeta profesional 202.198 del C. S de la J, se le reconoce personería para representar a ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. en los términos del poder sustituido.

La apoderada judicial de **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A**, señaló en su escrito de alegatos de conclusión en sede de segunda instancia que en el caso que nos ocupa, al momento de finalizar el vínculo laboral, la CCT de 1985-1987, no se encontraba vigente, por lo que no le era aplicable al accionante, máxime que, en vigencia de la misma, contaba apenas con 14 años de antigüedad y 37 años de edad, siendo el tiempo de servicios, el factor para determinar la CCT que le aplica, es decir, la CCT de 1991-1993.

Reiteró que la pensión del demandante tiene el carácter de compartida con la pensión de vejez que posteriormente le reconociera el ISS (hoy Colpensiones), porque así lo señala la convención, adicionalmente porque así se pactó expresamente entre las partes en el convenio celebrado.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de jubilación convencional–

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, se extiende al punto objeto de inconformismo planteado por el apoderado judicial de la parte demandante en su recurso de apelación.

Por virtud del principio de consonancia, determinará esta sala **i)** sí, contrario a lo dispuesto por la Juez de primera instancia, el demandante es beneficiario del CCT 1985-1987 y por consiguiente le asiste derecho a la pensión vitalicia de jubilación prevista en dicha convención, y consecuencialmente si tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional, al reajuste establecido por Ley y al pago de los intereses moratorio, o la indexación, **ii)** si el acta de conciliación y/o transacción o acuerdo celebrado entre el demandante y el banco, es ineficaz o inválido en el clausulado, conforme se invocó en el escrito de demanda.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en sentencia SU 1185 de 2001, en relación con la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) dijo:

*“Por tener la convención colectiva un claro contenido regulador y constituir sus cláusulas derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal del derecho. No obstante, por razón de su contenido, se considera que es una norma jurídica de efecto restringido, **aplicable tan sólo a las partes firmantes del acuerdo** y eventualmente a otros trabajadores de la empresa (Art.471 C.S.T). El alcance normativo de la convención*

*colectiva, que se proyecta al contenido propio de los contratos de trabajo, se genera según la clase de sindicato que interviene en la negociación, por tal motivo, puede ser de empresa, industria, gremial o de oficios varios, siguiendo las definiciones que para el efecto señala el artículo 356 del C.S.T, pero nunca va a tener un alcance nacional, toda vez que este efecto se reserva para la ley. **Al tratarse de una norma jurídica, la convención se convierte en fuente del derecho laboral, es decir, en el precepto regulador de las relaciones laborales.***

***Es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política.** La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política.”*

Pue bien, como hechos que no requieren debate probatorio se tienen los siguientes:

- i) Que el señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, nació el 17 de octubre de 1948.
- ii) Que el actor cumplió los 55 años de edad, el mismo día y mes del año 2003.
- iii) Que el demandante laboró al servicio del BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A., antes Banco Comercial Antioqueño, entre el 12 de abril de 1971 hasta el 31 de agosto de 1997, **cumpliendo 20 años de servicio al banco en el año 1991**; y que el retiro del servicio se produjo cuando contaba con 49 años, producto de una conciliación. (PDF 07 folio 129



ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

NIT 890.903.937-0

Certifica que el(la) señor(a) **GUTIERREZ ZAPATA CARLOS ARTURO**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **8290664**, laboró en esta compañía (antes Banco Comercial Antioqueño S.A., modificó su razón social por Banco Santander Colombia S.A. - Nit 890.903.937-0 mediante escritura pública 2157 del 23 de junio de 1997 de la notaría 29 de Medellín hoy Itaú CorpBanca Colombia S.A), desde el **12/04/1971** hasta el **31/08/1997** y es jubilado(a) de esta institución desde el **01/09/1997**.

Igualmente certificamos que el señor(a) **GUTIERREZ ZAPATA CARLOS ARTURO** al momento de su retiro (**31/08/1997**), devengó como último salario la suma de **\$527.979** y el **01/09/1997** comenzó a recibir su mesada pensional con expectativa de compartibilidad con el extinto Instituto Seguro Social, en cuantía de **\$511,063**; es decir, se pensionó con el **96.80%**.

A partir **1 de junio del 2009** su **mesada de jubilación** quedó **compartida** en valor de **\$133,935**, con el Instituto de Seguros Sociales hoy **Colpensiones**.

Para la liquidación de dicha pensión de jubilación se tuvieron en cuenta todos los factores salariales que se reflejan en la liquidación de la pensión y su condición de beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo.

En el formato 122 de acumulados de pagos, se ve reflejado el pago de las mesadas, mesadas adicionales, si aplica, así como los descuentos por salud, mes por mes desde el momento de la jubilación, hasta el último pago realizado por nómina.

Se expide, en la ciudad de Bogotá D.C. el 12 de diciembre de 2021.

Cordialmente,

MARTHA PATRICIA AVENDAÑO DUARTE
Gerente de Nómina

Ahora bien, tanto en el escrito de demanda, como en el de apelación, el apoderado judicial de la parte demandante insiste en que el señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita el 23 de agosto de 1985, con vigencia del 1985-1987, por cuanto a su juicio, la misma no ha sido modificada, derogada o denunciada, a pesar incluso de haber expirado el vínculo contractual entre las partes.

Para abordar el planteamiento del recurrente, se hace necesario diferenciar los conceptos de causación y disfrute.

A términos de lo dispuesto por la CSJ, es plausible el reconocimiento de la pensional convencional, cuando se cumple el tiempo y queda faltando la edad para su otorgamiento, **así la persona ya no esté laborando en la empresa**, en tanto, **“en términos generales el razonamiento imperante es que la edad no es requisito de causación sino de exigibilidad para el disfrute del derecho”**¹ Luego entonces el requisito de la edad, es intrascendente para acceder a la pensión convencional y no se requiere para causar el derecho sino, que se repite, se requiere para establecer el momento en que ha de comenzar su disfrute.

¹ sentencias SL2597-2018 SL 4979-2020

En relación con lo antes expuesto, en sentencia SL 3343 de 2020, la CSJ puntualizó que:

“Es necesario precisar que las convenciones colectivas de trabajo son fuente formal del derecho y, por tanto, sus enunciados normativos deben interpretarse a la luz de los principios y métodos de la hermenéutica jurídica laboral, dentro de los cuales se encuentra la favorabilidad, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política. Por este motivo, la interpretación de las disposiciones convencionales de índole pensional debe realizarse de acuerdo con sus características y su finalidad, tal como lo adocrinó la Sala en sentencia CSJ SL16811-2017, en la que dispuso que los textos normativos, dentro de ellos, los acuerdos convencionales, deben ser comprendidos como «un todo y, por tanto, su interpretación debe ser integral, armónica y útil a los intereses y expectativas razonables de ambas partes», lo que naturalmente excluye interpretaciones textualistas, focalizadas en frases, palabras o expresiones elaboradas al margen de los sujetos y los contextos.

En lo que concierne a la interpretación concreta de dicha cláusula convencional, para la Corte deriva que el derecho pensional puede ser adquirido por los ex trabajadores que al momento del retiro tengan acreditado el tiempo de servicios, pero no la edad” (negrilla fuera de texto)

Ahora bien, en la sustentación del recurso de alzada, el apoderado de la parte demandante, hizo mención a la sentencia SU 228 de 2021, en la cual la Corte Constitucional analizó el caso de una señora quien estuvo vinculada al banco aquí demandado y laboró del 28 de abril de 1981 al 22 de mayo de 2001, y para el 19 de mayo de 2008, cumplió con la edad de 50 años y 20 años de servicios siendo beneficiaria de la Convención Colectiva de Trabajo del 9 de septiembre de 1999-2001 que tuvo vigencia hasta el 31 de agosto de 2001, y que atendiendo a lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión convencional de jubilación. En el fallo de la primera instancia se acogieron las pretensiones de la demandante, sin embargo, en la segunda instancia se revocó el fallo de primer grado y en sede de casación la Corte negó el amparo de la parte actora.

En la citada providencia se expuso:

“Aunque la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no haya sido inconsistente con su propio precedente, la línea que ha venido defendiendo genera dos consecuencias diferentes, pues, a partir de ella, ha aceptado que la edad para exigir la pensión convencional se puede alcanzar a pesar de estar disuelto el vínculo laboral y, al mismo tiempo, que solo es posible reconocerla a quienes obtuvieron la edad en vigencia de dicha relación; en este último caso, en contravía del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Fundamental, que la Corte Constitucional ha venido aplicando enfáticamente en sentencias como la SU-241 de 2015, SU-267 de 2019 y SU-445 de 2019, como se verá más adelante.

(...)

*En ese orden de ideas, la Sala considera que en el caso de la señora María Cristina Duque Barrera tanto la Sala Sexta de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín como la Sala de Descongestión No. 1 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desconocieron el precedente constitucional en la materia, con lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y, en consecuencia, a la igualdad que le eran predicables frente al reconocimiento de su pensión convencional de jubilación de cara a la interpretación del artículo 54 de la convención colectiva, **que permite que el requisito de la edad se pueda alcanzar con posterioridad a la desvinculación laboral.***

(...)

*En el caso de la señora María Cristina Duque Barrera, **se reitera, su derecho pensional se causó antes de la fecha en que, según el tribunal de segunda instancia, expiró la convención colectiva, debido a que en su vigencia se cumplieron los 20 años al servicio del banco empleador,** lo cual se verifica incluso desde antes de su desvinculación el **22 de mayo de 2001.** El hecho de que eventualmente la convención hubiera podido fenecer el **31 de agosto de 2001,** o que la actora cumpliera los 50 años de edad el **19 de mayo de 2008,** no la limita para ser acreedora del derecho pensional, toda vez que, se insiste, **la edad no es una condición de existencia sino de exigibilidad de aquel.**"*
(negrilla fuera de texto)

En consideración a lo expuesto, no cabe duda que la edad es requisito de exigibilidad para el disfrute del derecho, siendo entonces razonable en virtud del principio de favorabilidad, acoger este planteamiento y analizar el derecho pretendido.

Con el escrito de demanda y con el escrito de contestación se adjuntó el texto de las convenciones colectivas de trabajo, pactadas entre el banco demandado y el sindicato de trabajadores. Particularmente se anexó las convenciones **CCT 1983-1985, CCT 1989- 1991, y CCT 1991-1993**, que son objeto de cuestionamiento.

Para sustentar la aplicación de la CCT 1985-1987, el apoderado de la parte demandante expresó en el **hecho sexto de la demanda:**

*"El señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA **acreditó 20 años al servicio del banco el 12 de abril de 1991 causando en dicho momento la pensión convencional** y 55 años de edad el 17 de octubre de 2003, es decir, cumplió con los requisitos del artículo 54 de la CCT vigente 1985-1987, que estableció una pensión mensual vitalicia de jubilación, sin límite en el tiempo, la cual se causa y paga, cuando, para el caso del hombre, éste llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad y después*

de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos. La cláusula convencional es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 54º. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de 20 años de servicio continuos o discontinuos a la institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación que se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del Banco” **negrilla fuera de texto (PDF 03 folio 12)**

En su recurso de alzada, el togado hace mención a los artículos 58 y 71 de la CCT 1991-1993, aduciendo que en estas disposiciones, lo que se hizo fue establecer una especie de régimen de transición, pues a las personas que ingresaban con contrato laboral a partir del 1 de septiembre de 1985, no se les aplicaría el régimen del banco, sin embargo, los trabajadores que tenía contrato al mes de agosto de 1985, sí se les aplicaría la convención, y en cambio no procedería aplicar el Decreto 2879 del año 1985.

Pues bien, los artículos 54 y 71 de la CCT describen lo siguiente: (PDF 01 folio 124- 228)

*“Artículo 54. Todo empleado del Banco que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de **20 años de servicio** continuos o discontinuos a la Institución, tendrá derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación que se computará sobre el promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro del banco, sin tener en cuenta bonificaciones, así: sobre los primeros seiscientos pesos (\$600) del promedio del sueldo básico devengado en el año anterior al retiro, el 80% de dicho sueldo; por los excedentes de seiscientos pesos (\$600) hasta mil pesos (\$1.000) el 60%; por los excedentes de mil pesos (\$1000) hasta tres mil pesos (\$3000) el 40% y por excedentes de tres mil pesos (\$3000) el 30%. De manera que el cómputo de la pensión será la suma de los diferentes porcentajes, en acuerdo con el promedio del sueldo básico devengado por el empleado en el año anterior a su retiro de la institución.*

Si al hacer la liquidación de acuerdo con la presente reglamentación, la pensión de jubilación resultare inferior a la que le correspondería al empleado de acuerdo con la ley vigente, el trabajador quedará jubilado con lo que le corresponde legalmente.”

Artículo 71o. PENSIONES DE JUBILACION. Todo lo comprendido en el capítulo 10o. de la actual compilación convencional vigente (compilación 1.985-1.987) artículo 54o. a 70o. inclusive, se aplicará solamente a quienes al 31 de agosto de 1.985 tengan celebrado contrato de trabajo por escrito y vigente en esa fecha con el BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO. A quienes ingresen con vínculo laboral a partir del 1 de septiembre de 1.985 no se les

aplicará el régimen de pensiones ya mencionado y se someterá en materia de pensiones a las leyes y demás disposiciones oficiales vigentes al momento de comenzar a disfrutar de su derecho.” (resaltos intencionales)

Destaca este Colegiado que las convenciones colectivas de trabajo expresan de manera clara e inequívoca su vigencia en el artículo 118 y 117, señalándose singularmente en la **CCT 1985-1987**, que la misma se extiende del 1 de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1987 (PDF 01 folio 124- 150), la **CCT 1989-1991**, tiene vigencia del 01 de septiembre de 1989 al 31 de agosto de 1991, (PDF 01 folio 195- 225) y que la **CCT 1991-1993**, tiene vigor del 1 de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 1993. (PDF 01 folio 228- 262)

Así, cosas, se tiene claro que el señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, al haber laborado en el banco accionado entre el 12 de abril de 1971 hasta el 31 de agosto de 1997, cumplió los 20 años de servicio el **12 de abril del año 1991**, y por tal, esta es la fecha de causación de la prestación y la que se debe tener en cuenta a efectos de buscar cual convención colectiva se le debe aplicar.

Ciertamente, para dicha calenda se encontraba vigente la convención colectiva trabajo **CCT 1989-1991**, la cual rigió 1 de septiembre de 1989 al 31 de agosto de 1991, según se describe en el texto visible en el PDF 01 folio 196- 226, contrario a lo que indicó la juez de instancia, quien señaló que al actor le era aplicable la CCT 1991-1993, pues esta rigió del 1 de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 1993 (minuto 1.09.00 de la grabación)

Conforme a lo analizado, se desvirtúa la tesis respecto de la cual se aduce que al actor le es aplicable la CCT 1985-1987, pues se reitera que el demandante cumplió los 20 años de servicio el **12 de abril de 1991**, en vigencia de la convención colectiva **1989-1991**, dado que el actor inició a laborar en el banco el 12 de abril de 1971, extremo inicial que consta debidamente acreditado en el plenario.

A lo anterior se agrega que en vigencia de la **CCT 1985-1987**, respecto de la cual el impugnante solicita dar aplicación, el señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, contaba con 37 años de edad (nacimiento 1948) y tenía **14 años de servicio** en la entidad (ingresó el 1971), es decir que no cumplía los 20 años de servicio en esa temporalidad.

En lo atinente a la pensión de jubilación, el artículo 58 de la CCT dispone:

“Artículo 58o. La pensión aquí fijada excluye y reemplaza la que sea señalada por las disposiciones legales que rijan al momento de hacer efectivo el derecho, pero el trabajador podrá optar por el pago de cualquiera de ellas a su elección. Si optare por la que se fija en la presente codificación, se entiende que el pagado de ella incluye la fijada por la ley y por consiguiente el Banco al cancelarla cumple con las disposiciones legales al respecto”.

Siendo entonces claro para esta colegiatura que en el texto de la CCT 1985-1987, no se convino la compatibilidad de la pensión legal y convencional, por el contrario, las mismas se excluyeron, máxime cuando en el artículo 70 de la CCT, se señaló lo siguiente: *“Lo establecido en este capítulo se aplica en consonancia con el decreto 3041 de 1966, por del cual el ISS asume los riesgos de vejez, invalidez y muerte.”* (PDF 01 folio 173). Lo que quiere decir que los compendios convencionales desde el año 1985 y siguientes, que incluyen el artículo 70, señalan con claridad que existe una subrogación de los riesgos, por lo que, incluso desde la CCT de 1985, ya se había pactado que la pensión era compartible.

En la censura a la sentencia de primera instancia, el togado se refiere a que la A quo cimentó su decisión en una providencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín, la cual: i) no está ejecutoriada, ii) el togado no comparte su tesis, y iii) que la juez de primera instancia realizó una indebida interpretación del fallo, pues lo que se indicó es que queda a elección del demandante de elegir o la pensión convencional o la legal, pero no dice que no sean compatibles las pensiones.

La sentencia a la que se hace alusión, la cual delantadamente acoge, respeta y comparte este colegiado, corresponde a la proferida el 12 de mayo de 2022, por esta Sala Tercera Laboral, en ponencia de la honorable magistrada LUZ AMPARO GOMEZ ARISTIZABAL, en el proceso radicado: 05001 31 05 013 2020 00397 01, en un caso idéntico al que hoy se somete a estudio, en la cual

se analizó precisamente el alcance y aplicación de las anteriores disposiciones, y en la que se puntualizó que no es posible la remisión a la que alude el apelante, a efectos de aplicar la CCT 1985-1987, precisándose que:

*“El beneficio pensional fue consagrado en esta convención de 1991-1993, sin que se pueda hablar que este pacto remite al de 1985- 1987 en el artículo 71, pues, claro es, que en dicha preceptiva se indica **“Todo lo comprendido en el capítulo 10o. de la actual compilación convencional vigente”**, lo que significa que **no hay un reenvío a dicho clausulado**, pues, se itera esta convención compila o reúne o junta, los beneficios, esto es, regula de manera íntegra todo lo concerniente a la prestación por tal, no es procedente ningún tipo de remisión, supuesto que no ocurrió con las convenciones posteriores, en las cuales si se hacía imperiosa la remisión a la convención 1991-1993, tal y como se hizo en el caso, pues, pese a que el actor causó la prestación en 1999, nos fuimos hasta el pacto 1991-1993, al ser este el que reguló el tema....*

*De conformidad con lo expuesto, se tiene que pueden existir casos en los que es viable que un trabajador pueda devengar dos pensiones, esto, en el evento de que se trate de prestaciones que jurídicamente resulten compatibles, no obstante, ello tiene que quedar expresamente consagrado en la convención, lo cual, **para el caso no se advierte que hubiese ocurrido como lo hace ver el impugnante**, pues el artículo 58 de la convención 1991-1993, lo que estableció es que **“La pensión aquí fijada excluye y reemplaza la que sea señalada por las disposiciones legales que rijan al momento de hacerse efectivo el derecho, pero el trabajador podrá optar por el pago de cualquiera de ellas a su elección. [...]”**, por tal, lo que se dio fue la opción de que el trabajador optara por la legal o convencional, más no la compatibilidad.*

Pese a que el togado recurrente alega que la citada sentencia no se encuentra ejecutoriada, ello no es óbice para que este colegiado la desconozca y apele a la misma para cimentar la decisión que nos avoca, al compartirse el criterio allí expresado.

Por otra parte, también es objeto de disenso por el apoderado apelante, que la pensión concedida al actor, riñe con la dispuesta en la CCT 1985-1987.

Al respecto debe indicarse que en efecto al demandante le fue concedida pensión, la cual fue reconocida mediante acta de conciliación suscrita ante el Juzgado Séptimo del Circuito de Medellín, el 19 de agosto de 1997, por el BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A., antiguamente BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO S.A., y el señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, mediante la cual las partes acordaron en la cláusula novena que: *“el actor a partir del 1 de septiembre de 1997, percibiría **pensión de jubilación convencional transitoria**, por concesión especial del 75% del salario promedio devengado durante el último año, no obstante tener 26.39 años de servicios, esto hasta que el Seguro Social o un Fondo de Pensiones le reconozca la pensión de vejez y una vez asuma esta, se le empezara a cubrir el valor de la diferencia que pudiere existir entre la pensión que reconociere el seguro social o un fondo*

privado de pensiones y la que estuviere pagando el banco". PDF 07 folio 132, especificándose seguidamente en el acuerdo lo siguiente:

El señor CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA, declara a "PAZ Y SALVO a la Empresa por todo concepto derivado de su relación laboral, incluyendo lógicamente la totalidad de los presuntos derechos (sin exclusión) provenientes de la apreciable antigüedad en el servicio. El Trabajador es consciente y así lo hace constar, de que los riesgos de vejez están en su caso directo única y exclusivamente a cargo del Instituto

2131

de Seguros sociales o una entidad de Seguridad Social, sometido a los requisitos de cotizaciones y edad señalados por las normas legales; sin embargo el Banco, le empezará a pagar a partir del día 01 de Septiembre de 1.997 una pensión de jubilación convencional liquidada sobre el 75% del promedio salarial devengado en el último año que equivale a la suma de (\$712.772,00) y se le pagará hasta que el Instituto de Seguros sociales o una Entidad de Seguridad Social le reconozca la pensión de vejez. (Para lo cual el Trabajador CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA se compromete a reclamar cuando cumpla los requisitos de la edad ante la respectiva Entidad).

Una vez ocurrido esto, El Banco le empezará a cubrir el valor de la diferencia que pudiese existir entre la pensión que reconozca el Instituto de Seguros Sociales o una entidad de Seguridad Social y la que le esté pagando el Banco en ese momento. En caso de que el Trabajador CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA no se presente a reclamar su pensión una vez cumpla los requisitos para tal fin, el Banco podrá hacerle compartida la pensión en forma automática, pagando desde ese entonces, sólo la diferencia que presuma le corresponde al jubilado, entre la pensión que le estuviera pagando en esa época y la que presume le reconocería el I.S.S o un fondo privado de no haberse presentado a reclamar.

Resulta claro que al demandante mediante acuerdo de conciliación, aceptó la **pensión transitoria de jubilación**, la cual se le otorgó a partir del 1 de septiembre de 1997, de manera anticipada y sin tener en cuenta la edad, pues para ese momento el actor pese a que contaba con más de 20 años de servicios, solo tenía 49 años de edad, concluyéndose que lo otorgado al demandante fue la pensión convencional contenida en la convención colectiva de trabajo, pues pese a que no cumpliera para ese entonces con el requisito de la edad, el alcance e interpretación de la que se ha hecho referencia, permite que el requisito de la edad se pueda alcanzar aun con posterioridad a la desvinculación laboral.

El otro argumento que expone el apoderado de la parte demandante es el concerniente a que la pensión entregada al demandante es transitoria y la contenida en la convención colectiva es vitalicia.

En relación con este cuestionamiento se precisa que, teniendo en cuenta que la causación de la prestación del actor se dio en 1991, la ley reguló la forma cómo, a partir del 17 de octubre de 1985, operaría la subrogación de la obligación.

Así las cosas, a partir del 17 de octubre de 1985, se estableció que operaría la subrogación de la obligación, y para ello se expidió el Acuerdo 029

de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de ese año, y posteriormente el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, en el que dispuso:

“Artículo 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.” (subrayas de la Sala)

Sobre el particular, la Jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral ha manifestado en las sentencias SL 5529 de 2018, citada en la sentencia SL 2171 de 2022:

«No sobra precisar que si bien los artículos 5 y 6 del Decreto 813 de 1994 y 45 del Decreto 1748 de 1995, establecen la compartibilidad de las pensiones de jubilación a cargo del empleador con la vejez por cuenta del ISS, la norma inicialmente mencionada, establece que el primero deberá cotizar al ISS hasta tanto el trabajador cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, quedando por su cuenta únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión otorgada por el instituto y la de jubilación que venía percibiendo, y que, además, para la financiación de la prestación que llegase a conceder el ISS, el empleador debe trasladar el valor correspondiente al bono pensional, ello, per se, no impedía que las partes en forma voluntaria, como en este caso a través de la convención colectiva de trabajo, dispusieran que la pensión a cargo del empleador fuera compatible con la de vejez».

En el mismo sentido, mediante proveído CSJ SL4080-2018, adoctrinó:

*«Desde el punto de vista jurídico, propio de ambos cargos, el Tribunal no incurrió en error alguno al sostener que **las pensiones convencionales reconocidas con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, son, en principio, compartidas con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales,** salvo que se exprese en ellas mismas que son compatibles. Tal orientación es la que se deriva expresamente de lo plasmado en el artículo 5 de la referida normativa y es la que ha mantenido de manera invariable esta Corporación a través de su jurisprudencia (Ver las sentencias CSJ SL13190-2015 y CSJ SL498-2016, entre muchas otras)».*

En sentencia SL 1031 de 2022, se refirió la CSJ, en relación con el tema de compartibilidad y compatibilidad pensional, en la cual se dijo:

*“Frente a este último punto, esta sala de la Corte ha señalado, con insistencia, que, por regla general, las pensiones convencionales causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son compatibles con las de vejez que otorga el Instituto de Seguros Sociales, pues la posibilidad de compartirlas sólo se generó tras la expedición del Acuerdo 029 de 1985, aprobado por el Decreto 2879 de 1985. Del mismo modo, ha adoctrinado que **las excepciones a dicha regla sólo pueden provenir de un acuerdo entre las partes, plasmado en el mismo instrumento normativo que consagra la prestación, como la convención colectiva, el pacto colectivo o el laudo arbitral.**”*

De acuerdo a la jurisprudencia descrita, la regla general de compatibilidad de las pensiones causadas con anterioridad al 17 de octubre de 1985, encuentra excepción en los casos donde las partes en el texto de la convención colectiva de trabajo o pacto colectivo, fuente del derecho prestacional, estipulan que la pensión reconocida ostenta la condición de compatible con las que reconoce el Instituto de Seguros Sociales, lo cual, en este evento en particular no se advierte que hubiese ocurrido, como pretende hacer ver el apelante.

El otro punto de cuestionamiento del apoderado judicial, es en lo atinente a la ineficacia del acta de conciliación y/o transacción suscrito entre las partes, por cuanto a su juicio, la misma desconoce derechos ciertos e irrenunciables.

Para esta sala el acuerdo de las partes plasmado en el acta de conciliación y acta de transacción, de fecha 29 de agosto de 1997, visibles en el PDF 07 folios 131 y ss, es un negocio jurídico que hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, salvo que se demuestre que la misma no tiene validez por alguna de las causas señaladas por la ley, lo cual no se evidencia en el caso bajo estudio, pues, como bien lo resaltó la juez de primera instancia, el acuerdo deviene eficaz, fue suscrito por autoridad judicial competente y no lesiona derechos ciertos e indiscutibles del trabajador, pues no cabe duda que la naturaleza de la pensión contenida en la conciliación, tiene la naturaleza de ser convencional y anticipó la fecha del disfrute de la pensión del demandante, estableciéndose que quedaba en cabeza del empleador el mayor valor, y en la pensión se otorgaron beneficios convencionales como los que contiene el artículo 54, 59 y 60 de la CCT, relativos a bonificación; razón por la cual estos reclamos no está llamados a prosperar.

Finalmente, y en lo atinente a la controversia del apoderado recurrente, respecto a que se analice el monto de la prestación concedida en el acta de conciliación, se advierte que, en esta instancia, no es posible realizar un pronunciamiento fuera del marco de los hechos y pretensiones de la demanda, o del objeto de debate (Principio de congruencia – Art. 281 del CGP), pues, de hacerlo, se atentaría contra el debido proceso y derecho de defensa de la pasiva, observándose que este cuestionamiento solo se trae en el recurso de apelación, y no se está ante alguna de las excepciones al principio de congruencia, que, como se indica en la sentencia de esta misma sala, son: *(i) el juez advierte fraude, colusión o una situación abiertamente ilegal que amerite una intervención excepcionalísima en aras de proteger los derechos fundamentales de las partes, según lo previsto en el artículo 48 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL466-2013); (ii) existen hechos sobrevinientes (CSJ SL3844-2015 y SL2808-2018), y (iii) la posibilidad del juez en materia laboral de decidir por fuera de lo pedido*”, resaltando la colegiatura, sobre este último punto, que las facultades ultra y extra petita por regla general están restringidas a los falladores de única o primera instancia y en esta caso no se dan los presupuestos para que, en sede de apelación se haga uso de dichas facultades pues no se está en presencia de un derecho mínimo e irrenunciable que haya sido debatido en el proceso y que, además, haya sido probado.

Costas

Costas en está a cargo del recurrente y en favor de la demandada. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario promovido por

el señor **CARLOS ARTURO GUTIERREZ ZAPATA** en contra de **ITAÚ BANCO CORPBANCA S.A.**

SEGUNDO: Costas en está a cargo del recurrente y en favor de la demandada. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2023.

TERCERO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA